

Cómo infundir terror; cómo construir horror

José Reveles*

Es terrorífico que en un país se contabilicen decenas de miles de desaparecidos y haya “buscadores” que decidieron ir, por su cuenta y riesgo, a sitios peligrosos donde hay tierra removida. Lo mismo en Guerrero que en Veracruz, Morelos –“vamos por Jojutla”–. Se anunció que donde hay más cadáveres confinados en fosas clandestinas es en el Estado de México, Sinaloa y muchos sitios más de una república herida.

Cada vez que pienso en los granadazos de Morelia (fiestas patrias de septiembre de 2008); en la masacre de Tlatlaya (30 de junio de 2014); en la inadmisibile tragedia de Iguala con media docena de asesinados, más de 80 heridos y los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos allí mismo (26-27 de septiembre de 2014); la matanza colectiva de Apatzingán (6 de enero de 2015); la de Tanhuato-Ecuandureo (22 de mayo de 2015) o la más reciente de Nochixtlán (19 de junio de 2016), caigo en la misma terrible convicción que me corroe desde hace décadas sobre que nada de todo este horror es casual. Es decir, veo apuntalarse una estremecedora y espantable hipótesis que permea las matanzas y desapariciones colectivas, la instauración de varios y sucesivos

necrogobiernos en México y el posicionamiento de la *necropolítica* como forma consuetudinaria de administrar y ejercer el poder en nuestro país.

La impunidad es denominador común en todos los casos mencionados, con excepción de la inaudita embestida contra los normalistas en Iguala-Ayotzinapa, en la que hubo más de 120 supuestos detenidos, todos integrantes de “Guerreros Unidos” y policías que, en teoría, los encubrían y estaban al servicio de los sicarios. Dos años después de estos acontecimientos, ni siquiera hay presuntos culpables juzgados, lo cual pinta de cuerpo entero la incapacidad oficial de ofrecer respuestas a tanta sangre derramada.

En cualquiera de estos hechos hiperviolentos parece haber una regla no escrita que ordena desviar averiguaciones y colocar velos sucesivos de ocultamiento en cada matanza colectiva en cuanto aparece el míni-

mo indicio, dentro de cualquier línea de investigación, que amenace con desmentir “verdades históricas” que al final no son sino vías de escape por donde las indagatorias se alejan de los más elementales estándares de justicia. Aludimos a media docena del tipo de violencias y horrores que más han calado en el ánimo apesadumbrado del país, todos acaecidos durante la administración del priista Enrique Peña Nieto. Al respecto, veamos:

I. Ya fueron liberados los tres presuntos zetas (autoconfesos culpables bajo torturas extremas), acusados de haber atentado contra una muchedumbre inerme la noche del grito de la Independencia de septiembre de 2008, cuando el gobernador perredista Leonel Godoy terminaba de convocar “vivas” a los héroes que nos dieron patria. Más de media docena de muertos y al menos 132 heridos siguen flotando en la impunidad ocho

* Periodista.

años después, porque nadie busca a los verdaderos perpetradores de un crimen colectivo que sacudió a todo el país con el lanzamiento de granadas de fragmentación en plena fiesta patria. (Para comprobar que no hay terror aislado o esporádico, tres días antes habían aparecido 24 hombres ejecutados con tiro de gracia en la zona de La Marquesa, presuntamente albañiles tomados por sorpresa en una vecindad en Huixquilucan, Estado de México.)

Concluido el gobierno de Felipe Calderón, ya no existe un solo responsable de los granadazos y es que si Juan Carlos Castro Galeana, Alfredo Rosas Elicea y Julio César Mondragón Mendoza no fueron los que lanzaron los artefactos explosivos de fragmentación y por ello el juez los liberó; entonces, ¿quién es el responsable del ataque a una multitud inerme con el que se inauguró en México el fantasma y el vocablo mismo del narcoterrorismo?

La impunidad y la liberación de culpables inventados apuntan a un Estado criminal que entonces administraba Felipe Calderón y del cual está probado y documentado que justamente pactaba con los narcos, por esas fechas, a través de un general del ejército de larga data represiva y delincencial: Mario Arturo Acosta Chaparro, quien moriría acribillado a balazos a manos de un par de sicarios mientras aguardaba a que repararan su automóvil Mercedes Benz en un taller mecánico de la colonia Pensil, en la Ciudad de México.

Acosta Chaparro y su compañero de andanzas represoras, el general Francisco Humberto Quirós Hermosillo¹ fueron condenados a 16 años de prisión, luego que un tribunal castrense, deliberando en el Campo Militar Número Uno, los halló culpables de encubrir y apoyar actividades ilícitas del Cártel de Ciudad Juárez y de su jefe Amado Carrillo Fuentes, *El Señor de los Cielos*.

Quirós murió de cáncer, en prisión, pero Acosta Chaparro consiguió un amparo que lo liberó a los seis años, curiosamente para incorporarse casi en automático a Los Pinos y ser el embajador plenipotenciario de Calderón ante todos y cada uno de los capos del tráfico de drogas en México. Fue reivindicado en su grado, luego ascendido a general brigadier y fue el responsable de “solucionar” el ataque a una multitud inerme, consiguiendo confesiones bajo torturas extremas de tres individuos que ni siquiera estaban en Morelia la noche del atentado criminal. Es

¹ Jefe de la *Brigada Blanca* en los años setenta del siglo pasado, grupo violento fundado, organizado y pagado por el gobierno para combatir con la ilegalidad a los “ilegales” guerrilleros de la época.

decir, estuvo en la gestación del crimen multitudinario, en la captura de falsos culpables, en la tortura para que se confesaran culpables este militar formalmente acusado de haber lanzado a cientos de mexicanos —ya muertos o en vida— al océano Pacífico desde aviones y helicópteros que despegaban de la base naval de Icacos o de la pista de Pie de la Cuesta, en Guerrero.

En 2008 y luego en 2009 escribí que esos tres inculcados estaban a 400 kilómetros de distancia de la plaza principal de Morelia, donde fueron arrojadas las granadas. Había pasado la noche en Lázaro Cárdenas. “Es absurdo, perverso, inexplicable, engendro de una mente enferma, el autoatentado precisamente en el estado natal de Calderón. Nada hay, fuera de este vesánico montaje, que justifique la necesidad de fabricar culpables, de que la Procuraduría General de la República acepte aprehender a tres hombres después de que una ‘llamada anónima’ los ubicó en una casa de Apatzingán, torturados, maniatados, vendados de los ojos”. La autoridad obedeciendo a la delincuencia. En vez de investigación, total colusión. Ante esto, un juez me envió un citatorio para que ratificara o desmintiera lo que afirmé en el libro *Las Historias más negras de narco, impunidad y corrupción*. Debido a eso, ratifiqué mi convicción en torno a la inocencia de los tres acusados injustamente. Otro juez me dio la razón y están libres.

2. En el caso Tlatlaya, población del Estado de México y vecina de Guerrero, casi dos docenas de jóvenes (supuestos secuestradores) fueron ejecutados directamente por elementos militares. Todos los que violaron la disciplina castrense (sólo eso, infracciones a la disciplina, desacato a los protocolos, sin ser acusados de asesinatos), quienes movieron cadáveres a los que perversamente colocaban armas en las manos, están fuera de prisión. Por tanto, aquí tampoco hay autoría ni detenidos.

La evidencia de perforación de balas en las paredes y la sangre salpicada en los muros a la altura de las cabezas, indica que los jóvenes fueron formados para ser fusilados. Tal vez eran presuntos delincuentes (¿23 secuestradores no son demasiados para un pequeño pueblo?), pero las ejecuciones a sangre fría, el movimiento de los cuerpos, la colocación de armas entre sus manos y brazos, hablan de una masiva liquidación extrajudicial. Insisto: ya no hay un sólo militar detenido de los ocho inculcados al inicio de las pesquisas. Luego entonces ¿se suicidaron y por eso ya no hay un acusado?

3. En Ecuandureo se reportaron decenas de asesinatos, pero tampoco hay responsables en prisión. Fueron al menos 43 abatidos en Tanhuato-Ecuandureo, un solo

policía entre ellos (los sobrevivientes hablan de que fueron 50), masacrados en tierra y desde helicópteros artillados mientras dormían; por lo que es mentira que los mataron en un supuesto enfrentamiento. Hay por lo menos 13 muertos a balazos por la espalda. La policía sembró armas a 16 cadáveres y movió al menos 7 cuerpos para montar la escena de una “confrontación” armada. Eso concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por su parte, inclusive los policías federales cambiaron en sus reportes la hora en que se iniciaron las acciones para no evidenciar la saña unilateral con la que actuaron.

4. Fueron victimados otros 16 civiles en Apatzingán, el 6 de enero de 2015. Algunos cuerpos presentaban boquetes de hasta 15 centímetros abiertos por balas expansivas. (Me remitió al 2 de octubre de 1968, cuando me tocó ver 14 cuerpos abatidos en Tlatelolco. Con la tecnología bélica de entonces, había cráneos reducidos a piel sin sostén óseo, había un par de mujeres embarazadas con enormes perforaciones justamente en el vientre.)

La sociedad mexicana pudo observar el video que consiguió la periodista Laura Castellanos, con padres cubriendo a menores de edad como si sus cuerpos pudieran frenar los disparos. En el aspecto oficial, también este caso se pretendió presentar como balacera bilateral sin baja alguna. Este es un “enfrentamiento” donde tampoco hay detenidos en prisión.

5. Nochixtlán representa el colmo. Se sugiere que grupos civiles desconocidos fueron los perpetradores de 11 muertes violentas. ¿Eran población local, eran maestros disidentes, eran paramilitares, eran soldados que llegaron sin uniforme? ¿Cómo es que se puede culpar a nadie si mes y medio después la PGR decía que sus peritos en criminalística, en balística, no podían ingresar en el poblado para hacer su trabajo?

El hecho real es que no había una sola persona señalada legalmente como perpetradora de esos crímenes después de dos meses de ocurridos los hechos. A más de 20 culpables fabricados, a unos jóvenes, que acudían a un sepelio en el panteón local, se les capturó en un principio para inculparlos, pero se les tuvo que liberar por inconsistencias graves, incluido el hecho de que ya habían sido capturados ilegalmente “antes” de que iniciara la balacera. Más de ocho semanas habían transcurrido sin que la sociedad estuviese enterada siquiera del calibre de las armas homicidas.

6. Finalmente, en este somero recuento parcial del horror, están los 6 muertos, los 43 desaparecidos y las

decenas de lesionados en la noche negra de Iguala, del 26 al 27 de septiembre de 2014, ente alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, jugadores de fútbol del equipo Los Avispones y ciudadanos comunes. Los padres y demás familiares no pueden recostar su memoria en una almohada de justicia, aunque haya más de 120 detenidos entre policías, mandos municipales, halcones, sicarios y operadores de la criminalidad organizada, incluidos el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, que eran operadores y garantes del negocio transnacional de los opiáceos, mismo que genera miles de millones de dólares en ese vasto reino de la amapola en Guerrero.

Casos de delitos de lesa humanidad, masacres colectivas que tienen el agravante de haber sido perpetradas por la autoridad, comprobado en cada ocasión el uso excesivo de la fuerza pública y la muerte violenta contra ciudadanos inermes o ya rendidos, todos se repiten como si se tratara de ofrecer una lección de castigo ejemplar e impunidad garantizada.

La normalización del horror como divisa y la siembra deliberada del miedo siempre aparecen, porque después de cada matanza “ejemplar” las aguas toman su nivel como si nada hubiese ocurrido, ya que en la realidad de la justicia a la mexicana, en efecto, no se mueve una sola hoja gracias a la impunidad reinante. Hay el propósito deliberado de que capas de tiempo y olvido blinden a la violencia brutal de cualquier escrutinio social y es que, tras la corrupción (que no es sólo depredar recursos públicos por parte de avorazados funcionarios públicos y políticos, sino un engendro del sistema que genera muertes) está siempre la impunidad.

Todo ese amasijo de injusticia está cohesionado por un pegajoso y pestilente aceite que la maquinaria oficial utiliza con éxito sólo relativo y momentáneo, que es la simulación. A diferencia de autoridades que son proclives a apostar al olvido y a la desmemoria colectiva, hay en los familiares y en las organizaciones civiles un reclamo constante de justicia, una respuesta profunda a la realidad de poderes (los fácticos y los legalmente establecidos) que en la práctica sólo buscan administrar un trabajo de muerte, según la categoría que el filósofo camerunés Achille Mbembe instala en su análisis de la “necropolítica”.

Citado por Carlos Fazio en su más reciente libro: *Estado de Emergencia: de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto*, Mbembe habla de una macabra operación oficial que se apoya en la instrumentalización generalizada

de la existencia humana y la destrucción material de cuerpos y poblaciones humanas “juzgados como desechables y superfluos”. No otra es la explicación de centenares de fosas clandestinas en el territorio mexicano que, aunque suene macabro, semeja ya un queso gruyere. Mientras escribo estas líneas, hay familiares del *Colectivo Solecito* que escarban en 56 fosas del predio Colinas de Santa Fe, en Veracruz. Llevan 10 cuerpos recuperados y la velocidad con la que avanzan los hallazgos rebasa la capacidad de los peritos. Más de 60 familiares acudían a aportar muestras de ADN para confrontar con los cuerpos aparecidos, víctimas dolientes se sumaban a la búsqueda. Ante todo esto me acordé de la frase que me dijo el padre Alejandro Solalinde en 2011: “busquen en Veracruz; allí hay más”. Porque se lo revelaron testigos y perpetradores en secreto de confesión, ya que el padre se lo dijo primero a los obispos y luego en persona al gobernador Javier Duarte y al presidente Calderón. Nadie asumió el reto ante tan feroz realidad ni dio seguimiento a la búsqueda de sitios de captura (“levantón”) de seres humanos, a los parajes que hacían las veces de prisiones clandestinas, tortura, muerte, desmembramiento y desaparición de sus cuerpos en ácido. Una multitud, una *Fuenteovejuna* de *pozoleros* en Veracruz.

Precisamente fue éste uno de los temas más escandalosos que se difundían en todos los medios en épocas *calderonistas* cuando privaba la absurda premisa de que a más muertes y más violencia, más triunfo de la guerra oficial. Por todo ello, uno se pregunta: ¿hay peor horror que la presentación oficial de *El Pozolero* original, Santiago Meza, quien supuestamente disolvió en ácido a al menos 300 personas, mientras estaba al servicio del Cártel de Tijuana y luego el de Sinaloa, pagado por Teodoro *El Teo* García Simental?

La difusión de las hazañas terroríficas de gente amoral corre a cargo de la autoridad. Son imágenes y descripciones que se siembran y se instalan en la percepción colectiva y en muchas ocasiones, como ocurrió con *El Pozolero*, las imputaciones ni siquiera están confirmadas porque no han llegado todavía a un ministerio público y menos a un juez. ¿Por qué 300 y no 500 disueltos en ácido? ¿Por qué no 50 o solamente 20? Nunca hubo identificación de persona alguna “pozoleada”, porque supuestamente sólo quedaban uñas y cenizas. Ni un solo individuo asesinado y *pozoleado*, con nombre y apellido, con sitio y circunstancia, más allá de una difusa maquinaria eliminadora de cuerpos en el imaginario colectivo. Santiago Meza ni siquiera cometía delitos graves,

según ironizaba el experto Gabriel Barrón Cruz: si acaso los administrativos y leves de cremación e inhumación clandestina, pues los cadáveres llegaban como tales, inertes, sin que él tuviera que ver con privarlos de la vida.

El gobierno creyó que esa exhibición francamente obscena inhibiría al ciudadano común y así se evitaría la comisión de delitos, pero el resultado ha sido diametralmente opuesto: se alienta la imaginación, la audacia, el deseo de imitación, la ambición del dinero y del poder, la apuesta segura a los nichos de la impunidad rampante, la respuesta aspiracional por ser “exitosos”, aunque sea temporalmente y aunque se les vaya la existencia en ello, como esos héroes-monstruos creados desde la narrativa oficial: “Más valen tres meses viviendo como rey, que muchos años sin salir de buey”; “mejor morir como mañoso enriquecido que toda una vida de jodido”.

Esto ocurre con una juventud sin alternativas de ocupación en México como lo es ahora, en plena etapa del llamado “bono demográfico”. Los años de supuesto potencial máximo productivo en décadas, que se nos están yendo como agua entre los dedos. Un alto funcionario policial, de nefasta memoria, reconocía la derrota anticipada de la guerra de su jefe Calderón, en noviembre de 2009, en un foro en Boca del Río, Veracruz:

Lo verdaderamente grave es que la delincuencia ha ofrecido a los jóvenes la oportunidad de una revancha social. Los seguidores del crimen encuentran un sentido de identidad y dignidad que no hallan en otro lado [...] El crimen organizado ofrece trabajo y oportunidades que ni la sociedad ni el gobierno hemos podido dar. Los grupos traficantes colocan mejores ofertas laborales y aprovechan, además, los espacios de impunidad que la autoridad permite.

Se quedó corto el cálculo del general Guillermo Galván Galván cuando era secretario de la Defensa Nacional y afirmaba que medio millón de mexicanos tenían ocupación y obtenían sus ingresos en las filas de la delincuencia organizada. Sobre todo, no dijo que las ganancias multimillonarias del crimen ni siquiera se quedan en México, pues se depositan en Estados Unidos y otros paraísos fiscales.

Ciudadanos dolidos —que no las autoridades— siguen encontrando fosas clandestinas y cadáveres por muchos rumbos del país. Cuando concluía este escrito, se difundía el informe “*Tetelcingo: interpretaciones preliminares*”, en el que se detalla

que de los 117 cuerpos rescatados en esa comunidad de Morelos, con apoyo de la Universidad Autónoma estatal, al menos 84 tuvieron una muerte violenta, pese a lo cual ni siquiera se abrió una carpeta de investigación en el 75% de esos casos. El gobierno de Graco Ramírez desaparecía personas que estaban siendo buscadas por familiares y las enviaba a la fosa común, que así se convertía en clandestina, en Tetelcingo.

“A los políticos no les gusta hacer obras de drenaje, porque no se ven y no lucen. A nuestros familiares los ignoraron; ocultaron los cuerpos y los datos bajo tierra y así eran invisibles en su mentalidad”, resumía Amalia Hernández, tía del joven asesinado Oliver Wenceslao Navarrete. Los tiraron como perros, como basura y eran cuerpos buscados por los suyos.

Con respecto a lo anterior, en Sinaloa hay 278 mujeres en el grupo *Las Rastreadoras*, que salen a buscar entierros clandestinos. Ya localizaron 78 cuerpos y 24 de ellos fueron identificados y entregados a sus familiares. Salen dos veces por semana y siempre hallan restos por los rumbos de Choix, El Fuerte y Ahome. “No buscamos huesos, sino a nuestros tesoros”, resume una madre que tiene a su hijo desaparecido. Al horror se agrega que autoridades federales y estatales se disputan para decidir quién se hace cargo de los exámenes de ADN. “Estamos encontrando un cuerpo por semana, pero hay que acelerar la identificación genética para poderlos entregar. ¿Qué caso tiene que sigamos hallando más cuerpos si se quedan allí, sin exámenes genéticos?”.

Es terrorífico que en un país se contabilicen decenas de miles de desaparecidos y haya “buscadores” que decidieron ir, por su cuenta y riesgo, a sitios peligrosos donde hay tierra removida. Lo mismo en Guerrero que en Veracruz, Morelos –“vamos por Jojutla”–. Se anunció que donde hay más cadáveres confinados en fosas clandestinas es en el Estado de México, Sinaloa y muchos sitios más de una república herida.

Un mensaje inequívoco de terror, con amagos de represión, apareció en los medios el miércoles 24 de agosto de 2016, con un secretario de Educación, Aurelio Nuño, rodeado de uniformes y cascos verde olivo en el Campo Militar 37-C de San Miguel de los Jagüeyes. Allí, en el marco de la creación de seis escuelas, reiteró la postura oficial inflexible frente a la inconformidad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que rechaza las pruebas de evaluación a los maestros y exige la derogación de una Reforma Educativa que juzgan laboral, administrativa y privatizadora, impuesta desde el extranjero. Ante todo

ello, el secretario afirmó: “ningún diálogo con la CNTE mientras haya paro”.

La imagen de una multitud de militares cobijando al responsable de la Educación en el país –y al gobernador mexiquense Eruviel Ávila– en el momento más conflictivo de la protesta magisterial, con miles de mentores que no habían acudido al inicio de clases en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, era sobre todo ominosa y amenazante. Más aún si muy cerca de allí, en el mismo municipio de Huehuetoca, en días previos habían aparecido 12 cadáveres más en el fondo de un pozo, según la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Personas Desaparecidas, que llegó al sitio en compañía de integrantes de Amnistía Internacional. El vocero de la Brigada dijo que trabajadores ferrocarrileros excavaban junto a las vías del tren, mientras que policías municipales se llevaban a sitios desconocidos los restos humanos, los cuales eran simplemente puestos junto a un basurero y bañados con cal para ahuyentar el hedor.

Nunca se acordonó el área, la autoridad no informó, no se siguieron protocolos de identificación y los familiares lo descubrieron por datos que ofrecieron los pobladores. La procuraduría mexiquense ya reconoció el hecho, pero nadie sabe cuántas osamentas fueron extraídas y dónde están ahora.

Los trabajadores de Ferrocarriles (por Huehuetoca pasa *La Bestia*, el tren de carga en el que suelen viajar indocumentados centroamericanos) le dijeron a los familiares, cuenta Juan Carlos Trujillo Herrera de la Brigada Nacional de Búsqueda: “Nosotros venimos a trabajar, damos con los cuerpos, los ponemos ahí, avisamos y vienen a recogerlos como si fuera cualquier objeto; se los llevan y nosotros seguimos sacando material del pozo. Estamos exhumando de manera inconsciente”.

Un macabro testimonio del militar mexicano Zacarías Osorio Cruz, quien desertó de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y pidió asilo en Canadá a finales del siglo pasado, narró con detalle cómo en el Campo Militar 37-C de San Miguel de Los Jagüeyes, donde hay un campo de tiro, se fusilaba a disidentes y presuntos guerrilleros por órdenes superiores. También se ejecutaba a civiles en el campo militar de San Juan Teotihuacán, comentó Osorio Cruz ante tribunales canadienses. El escándalo de las ametralladoras y morteros no llamaba la atención de los pobladores, pues ahí hacían prácticas hace décadas y las siguen haciendo las tropas del ejército.

Copyright of Cotidiano - Revista de la Realidad Mexicana is the property of Universidad Autonoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.